

Cuadernos del Sur

Año 14 - N° 27

Octubre de 1998

Las vías de la democracia

Jean Marie Vincent*



En el mundo contemporáneo la democracia es, casi en todas partes, una democracia representativa parlamentaria, muy a menudo marcada por rasgos autoritarios, es verdad, pero sobre todo es una democracia ligada al Estado nacional. No está organizada como una federación de municipalidades o de regiones autogobernadas: por el contrario, está inserta en el marco de la soberanía estatal nacional, es decir, colocada bajo la preeminencia real de las instituciones estatales centrales que ejercen una tutela más o menos pesada sobre las otras instituciones.

El Estado, que posee el monopolio de la violencia física legítima, pone en orden la violencia interna mediante la proscripción de la violencia abierta contra los individuos y la legitimación de los dispositivos disciplinarios presentes en las formas económicas y sociales dominantes. Al mismo tiempo pone en orden la violencia externa organizando o previniendo los choques con otros Estados y diciendo también quiénes tienen el derecho de viajar por el territorio nacional o de instalarse en él. Hay enemigos externos o enemigos internos que se deben combatir y la simbología del Estado nacional es en gran medida una simbología simultánea de la inclusión y de la exclusión, de lo dentro y de lo fuera. El Estado no es el defensor de un interés general ideal sino que es el intérprete privilegiado y el ejecutor del interés nacional (mantener la inclusión y la exclusión) que se sitúa más allá de las confrontaciones entre los partidos y los movimientos de opinión.

La representación maestra del interés nacional como autorrepresentación del Estado se subordina así la representación política democrática, le fija límites y le exige someterse a ciertas reglas (el consenso, el respeto incondicional a las instituciones). De ese modo el campo de la política se circunscribe a la formulación de intereses subordinados al interés nacional.

* *Futur Antérieur*, núm. 38, París, 1996-4.

Sin duda, los partidos y los sindicatos pueden formular «proyectos de sociedad», perspectivas de un futuro diferente. Pero en el marco de su trabajo cotidiano de representación deben esforzarse por elevar los «intereses» de sus mandantes a la dignidad de la representación nacional, es decir, deben actuar sobre intereses económicos reales (por ejemplo, el interés de los asalariados por vender bien su fuerza de trabajo) y sobre significados ligados a la historia específica de los grupos que tienen que representar. Deben hacer sacrificios al «economismo» de una sociedad centrada sobre lo económico de la valorización del capital, al mismo tiempo que producen valorización simbólica (historias más o menos míticas sobre actos fundadores) para justificar los lazos permanentes de representación entre los representantes y los representados.

La representación política integra al Estado a la vez mediante una conflictividad limitada entre los poseedores de capitales y los propietarios de la fuerza de trabajo y mediante un acceso diferenciado a la dignidad política nacional en función de contribuciones simbólicas específicas. Existe en eso una dramática social de gran eficacia que permite conciliar la necesaria estabilidad del Estado y la movilidad inevitable de las relaciones sociales en un contexto de metamorfosis incesantes de las condiciones de valorización.

Por supuesto, eso no quiere decir que sea imposible la aparición de dificultades serias. Por el contrario, son relativamente frecuentes, en particular cuando los conflictos de clase se agudizan y cuando los fenómenos de desclasamiento y de expulsión de las relaciones de trabajo se multiplican. La rigidez relativa de las estructuras y de las intervenciones estatales entra entonces en contradicción con el desplazamiento rápido de las relaciones sociales y a plazo más o menos breve se producen desequilibrios. Por consiguiente hay que volver a definir periódicamente las modalidades de intervención del Estado y las relaciones de representación (reorganización de los partidos y de los tejidos asociativos) para conseguir nuevos equilibrios.

En este sentido, no es exagerado afirmar que estamos ante una especie de ley de compatibilidad entre el funcionamiento estatal, la representación política y los movimientos de valorización del capital en la medida en que son momentos autónomos de un complejo proceso unitario. Los comportamientos burocrático-monárquicos de las élites administrativas no corresponden siempre a las actitudes que se observan en las actividades económicas, pero por su regularidad y su previsibilidad crean las condiciones espacio-temporales propicias para la valorización y la representa-

ción. Del mismo modo el vigor de la acumulación privada del capital es indispensable a los poderes públicos para procurarse los medios de financiar su propio funcionamiento y la vida política.

La representación política, por último, debe dar a los diferentes grupos sociales la posibilidad de articularse entre sí así como con las instituciones estatales teniendo en cuenta relaciones de fuerza cambiantes y desplazamientos simbólicos ininterrumpidos en los mundos sociales vividos. Para que haya un equilibrio dinámico es necesario en efecto que las tres esferas sociales se provean respectivamente lo que necesitan para reproducirse. No es necesario insistir, a este respecto, sobre las prestaciones del Estado y de la economía. Todos se convencen fácilmente de que las contribuciones estatales y económicas para la reproducción social son decisivas.

Por el contrario, a menudo se subestima el papel esencial de la representación política. Algunos tienden a ver solamente un conjunto de procedimientos destinados a designar dirigentes (ver, por ejemplo, las tesis de J. Schumpeter). De este modo ignoran la importancia de los procesos identificadores que se realizan en los debates y confrontaciones políticas. Cuando grupos sociales entran en escena en los juegos de la representación política, se dan puntos de referencia para decir cómo se ven y cómo ven a sus socios-adversarios en las relaciones políticas de conjunto. De este modo se asignan lugares en las instituciones y con relación al Estado, y por consiguiente, en el conjunto de la sociedad.

Sin duda, es posible comprobar que muchos grupos están insatisfechos por los resultados que obtienen. Los sectores económicamente débiles sólo reciben en general prestaciones muy limitadas que afectan poco su situación de explotados. Pero sea cuales fueren las frustraciones que se manifiestan en la representación política, ésta sigue siendo atractiva mientras garantice un mínimo de reconocimiento social a quienes se sitúan al pie de la escalera. De cierto modo, la representación política crea una comunidad política nacional que supera las barreras de clase relativizándolas en el plano simbólico y sobrevalorando tanto los peligros externos como los riesgos de desagregación social que provienen del interior.

Esta alquimia sutil, esta mezcla sorprendente de expresiones verdaderas y de historias imaginarias, de redoblamiento y negación de las realidades sociales, está hoy en discusión. En su fase actual de mundialización, el capital no se detiene ya en el marco nacional como marco primero y privilegiado de su despliegue y valorización. Por supuesto, no rechaza al Es-

tado nacional como elemento organizador de zonas de valorización (creación y mantenimiento de infraestructuras, formación de mano de obra calificada, etc.), pero no convierte ya a ese Estado en el elemento mediador fundamental de la relación de trabajo y, por lo tanto, de las relaciones sociales. Presiona para que la contractualización de las relaciones entre capitalistas y asalariados escape a la tutela estatal y a la intervención de las grandes centrales sindicales. Si se siguen los discursos de los representantes más calificados del sector patronal, es el mercado (bajo todas sus formas) el que debe convertirse en el elemento mediador-formador de las relaciones sociales. En particular debe convertirse en el vector de una monetarización de los intercambios sociales y, por consiguiente, de la propia socialidad.

No se trata ya de buscar la integración subordinada de los individuos a un Estado paternalista, sino de someterlos más directamente a las relaciones sociales de las mercancías y del dinero. Los individuos ya no deben identificarse con las figuras emblemáticas de las instituciones estatales y políticas, sino con las figuras efímeras que dominan los mercados y con las configuraciones coyunturales (conjunción de fuerzas y de ocasiones). Para ellos, el Estado debe transformarse en un Estado «barato», es decir, que tiende a ser cada vez más funcional para los movimientos de valorización y cada vez menos protector. Debe despojarse poco a poco de una parte de los atributos de la soberanía (acuñar moneda, decidir la guerra) para integrarse en los juegos económicos transnacionales en los que los mercados financieros tienen un peso decisivo.

Esta ofensiva de los representantes del capital contra el Estado como principal agente del control social está, es verdad, lejos de haber conducido al desmantelamiento del Estado-providencia o Estado social. Pero ha tenido la suficiente fuerza como para hacer entrar en crisis las prácticas políticas habituales y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Los partidos tienen dificultades para cumplir con su oficio de representación política porque los intereses a los que dan forma y llevan a la escena son cada vez menos considerados a nivel de las políticas públicas. No responden a sus mandantes los cuales, a su vez, creen cada vez menos que la participación política pueda llevar al reconocimiento social efectivo,

El espacio público se encuentra en una situación de casi implosión. Eso se hace evidente, se deshilachan los contenidos de las confrontaciones y está lleno de sonidos que ya no se escuchan o que ya no quieren decir nada. La escena política, en gran medida, no es más que un teatro de sombras en el cual la representación política ha quedado reducida a apoyarse en simu-

laciones o simulacros porque las cosas esenciales suceden en otros ámbitos.

El Estado sigue allí pero se sustrae a los movimientos de la opinión pública y a las discusiones sobre las estrategias a seguir, aceptando imposiciones capitalistas cada vez más pesadas sobre su propio funcionamiento. El Estado debe hacerse un Estado flexible, tendido por entero hacia la rentabilización de sus propias actividades. Sus servidores en realidad no deben presentarse ya como los principales sostenes de una moralidad pública correspondiente a las exigencias éticas de una comunidad política que reúna lo esencial de la sociedad.

El Estado, así comprendido, no puede ya sintetizar, unificar, los procesos identificadores y de reconocimiento que trabajan en la representación y en las confrontaciones sociales. A partir de tales premisas los individuos y los grupos no pueden ya, o pueden muy difícilmente, encontrar su lugar, y la sociedad política entra en un estado de desequilibrio permanente y de regresión de los intercambios políticos.

En tal contexto, los gobernantes tienen una clara tendencia a hacer política afirmando que ya no hay ninguna política posible porque ya no hay opciones que se puedan debatir, sino simplemente orientaciones que se imponen por sí mismas. Hacer política equivale en cierto modo a convencer a quienes se supone que son ciudadanos mayores de que no deben participar sino formalmente en la política y sólo para una reafirmación formalista de derechos políticos que no tienen alcance efectivo. La representación política debe organizar su propia degradación como ritual de retirada de la política, como liturgia que celebra la virtud de debates o de confrontaciones que ya no tienen validez. La política a nivel de las instituciones no es, por lo tanto, más que una antipolítica que organiza, más o menos sistemáticamente, la desmoralización de la mayoría. No actúa ya sobre las relaciones de poder, sino que produce y reproduce relaciones de impotencia a nivel del espacio público y de la representación.

Todo eso está en parte enmascarado por la existencia de debates sobre problemas llamados de la sociedad, como la delincuencia, la inseguridad, la toxicomanía, la inmigración, en los que se puede ver enfrentarse políticas llamadas de prevención, de represión reforzada o de reinserción. Pero esas políticas de encantamiento abarcan casi siempre objetos desrealizados, cortados de sus raíces sociales (la delincuencia y la criminalidad, como producción y reproducción de ciertas relaciones sociales) y encuentran su terreno de alimentación en las angustias o los miedos de los que dejan de hacer pie en la vida cotidiana, ven su jerarquía social amenazada y ya no encuentran la familiaridad de su mundo social vivido de costumbre. En una sociedad

que les es cada vez más extraña, se les incita a buscar chivos expiatorios, explicaciones imaginarias a sus dificultades y, en resumen, a vivir la política de un modo alucinado o como una pesadilla con los ojos abiertos.

La proliferación cancerosa de la antipolítica asesta evidentemente golpes muy duros a las prácticas democráticas. Si la política que está degenerando no puede traer una renovación de la vida social, sino que solamente puede acompañar los efectos desastrosos de la mundialización, los intercambios democráticos, particularmente en ocasión de las competencias electorales, pierden buena parte de su sentido. Eso significa en particular que los que no quieren renunciar retirándose de la política, se ven colocados en una situación imposible y deben exigir más democracia mientras la representación política gira en el vacío o se limita a reproducir relaciones de poder regresivas. Ellos aparecen, por lo tanto, o bien como Casandras que quieren exorcizar la mala suerte, o como voluntaristas que pierden el sentido de la realidad y de lo que es factible. Pueden sin duda llegar a todos los que tienen nostalgia de la representación política tal como ésta se manifestaba cuando el Estado-Providencia estaba en su apogeo. Pero no pueden indicar los medios para volver atrás, al viejo buen tiempo de antaño, pues eso es simplemente imposible.

Por eso, para salir del callejón sin salida actual, se deben aplicar nuevas prácticas políticas que rompan deliberadamente con las viejas costumbres de subordinación al Estado y a la economía. Cualquier política que reconoce la prioridad del Estado y hace de éste el árbitro supremo, se somete en efecto a una lógica de reproducción de las relaciones de poder en la sociedad. Al postular en abstracto que el Estado puede resolver todos los problemas sociales, ella se somete de hecho a una verdadera compulsión de repetición, a la repetición infinita de «reformas» que no cambian nada fundamental en el funcionamiento de la sociedad (particularmente la relación capital-trabajo). Ella se inclina así, sin darse cuenta, ante el altar del economicismo ambiental imperante, es decir, ante la dominación de lo económico (de la valorización) sobre las relaciones sociales.

Cuando se intenta liberar la política, también hay que cuidar que no caiga en la trampa de una retórica de la política pura o en la de la afirmación política que se cree omnipotente. La política no puede romper con sus propios demonios sino mediante un difícil trabajo sobre sí misma, sobre sus objetivos y sobre las modalidades de su acción. Es necesario, antes que nada, que descubra el carácter problemático de los intereses a partir de los cuales se articula. Incluso cuando la política es una política de defensa de los intereses de los dominados y de los explotados, puede ser

sólo una defensa estrecha de lo que liga a los explotados a su propia explotación (por ejemplo, la valorización «economista» de la fuerza de trabajo). Pero no hay que engañarse: no se trata de oponer intereses «históricos» a intereses «inmediatos». Lo que está en discusión es la formulación de intereses o de objetivos que, sin dejar de lado las exigencias vitales más urgentes, no se limiten al horizonte social actual sino que encaren otros modos de vivir en común y de dar forma a las relaciones sociales.

La finalidad de una política renovada no es oponer a lo existente otra sociedad abstracta, sino dar a la mayoría los medios para controlar sus relaciones y conexiones sociales. En esta perspectiva la producción social no debe ser considerada ya como una producción de valores económicos, sino como una producción ricamente articulada de relaciones sociales que es, naturalmente, producción de bienes y de servicios, pero también y sobre todo producción simbólica de comunicaciones, de intercambios y de relaciones entre las personas. Una política renovada evidentemente no debe renunciar a intervenir sobre lo económico, pero no puede hacerlo a partir de consideraciones estrechamente económicas, lo que equivale a decir que la intervención sobre la economía debe tener objetivos que trasciendan la producción de valores y que se fijen como meta subordinar la esfera de la producción a orientaciones que son externas a ésta (por ejemplo, vivir mejor en común, dedicar más tiempo a actividades culturales, etcétera).

Por supuesto, se pueden formular objeciones fundamentales a esas perspectivas. Existe en particular el riesgo de caer en la mala utopía que consistiría en rechazar todo desarrollo tecnológico, condenar toda forma de crecimiento y toda riqueza social. Pero si se quiere reflexionar sobre esto, se percibirá que el fin de la dominación de la economía de la valorización puede abrir la vía a una economía de intercambios de servicios, a modalidades diferentes de crecimiento y de satisfacción de las necesidades que nada tendrían que ver con la austeridad de una sociedad espartana.

Hoy es difícil imaginar relaciones interindividuales que no estén marcadas por el cálculo y por diferentes modos de evaluación y de apreciación bajo la égida del valor económico. Eso, sin embargo, no prohíbe interrogarse sobre otras relaciones que descansarían sobre intercambios simbólicos liberados del economismo y el desarrollo multilateral de las manifestaciones vitales de los individuos. Ahora bien, si cada uno dispusiera de un ingreso suficiente para vivir, la fuerza constreñidora de las relaciones de evaluación disminuiría considerablemente y dejaría mucho más espacio a la creatividad en las relaciones sociales y a medidas o dispositivos sociales que garantizaran el pluralismo de la acción.

Desde ahora es posible comprobar que la combinación de las fuerzas productivas humanas (que el capital se apropia) tiene como efecto desarrollar la productividad social en una escala hasta hoy desconocida. ¿Acaso no está permitido pensar que esta productividad social, cuyas fuentes son las interdependencias cruzadas, la fortísima dinámica de la producción de los conocimientos y la multiplicación de los intercambios, puede ser utilizada para instaurar otras relaciones sociales? Sin duda, para eso se necesita una revolución copernicana en los comportamientos que reemplaza el combate competitivo por la emulación social para resolver problemas y enriquecer las relaciones entre los individuos y los grupos. Pero tal reorientación no es tampoco una mala utopía, puesto que es la única respuesta posible a las tendencias a la autodestrucción cada vez más potentes en la lógica del capitalismo actual, y no trata de imponer un organigrama a la sociedad ni de prescribirle un futuro cerrado.

En esta perspectiva, la política ya no puede conformarse con administrar mejor lo existente, sino que debe transformarse también en una intervención permanente sobre las relaciones sociales y dentro de ellas, para combatir allí todas las tendencias a la disociación y crear en su seno lazos sociales. En ese sentido, no puede ser solamente confrontación de juicios o procesos de sumas de voliciones y reacciones, pues debe asumir el malestar de los individuos tanto en lo social como en lo político.

En la sociedad capitalista las subjetividades, en efecto, están comprimidas entre la explotación de sí mismo (las conductas de valorización) y la explotación del otro, al mismo tiempo que superan el confinamiento que se les impone (el encierro paranoico en la valorización) mediante los lazos que establecen entre ellas, mediante las capacidades de actuar que ellas desarrollan. Los desplazamientos incesantes de las relaciones de producción y las desestructuraciones consecutivas de los mundos vividos no dejan jamás en reposo a las subjetividades. Ellas son, la mayoría de las veces, empujadas, molestadas, en sus intentos de gozar de la llamada plenitud de la personalidad solipsista (de la valorización) y deben vivirse, sea en un activismo sin horizonte, sea en la discontinuidad y la inquietud.

La política, por lo tanto, debe dirigirse a los individuos como a subjetividades que necesitan más socialidad para adquirir los medios para vivir, es decir, para vivir de manera diferente. El problema no consiste en adherirse a orientaciones o a programas que definan en abstracto el bien común, sino en hacer salir a los individuos de su aislamiento con respecto a los demás para que puedan, a partir de sus propias preocupaciones, construir una fuerza colectiva no opresiva.

Así concebida, la política no puede ser ya una contribución rutinaria a la reproducción de las relaciones de poder en la sociedad. Por el contrario, debe tratar de transformarlas, aumentando el poder de acción de la mayoría (la multitud en vías de articulación y agregación) y disminuyendo el peso de las constricciones y de la violencia que toda una serie de instituciones ejerce sobre los individuos y los grupos sociales. La política no puede suprimir todas las formas o manifestaciones de *potestas*, es decir, de poder coercitivo, pero debe privilegiar claramente la *potentia*, es decir, la potencia de la acción común. Por eso no debe aceptar más que el Estado sea el lugar donde los intercambios políticos se condicionan o sancionan.

El Estado, organizador del consenso y de la representación política es, de hecho, el prisma obligado en el que hasta ahora se retractan los pedidos de intervención, las búsquedas de transacciones, las tentativas de reformas de las relaciones sociales y todo lo que se refiere a las relaciones entre los grupos sociales. El Estado rechaza en la misma medida en que legitima y procede a selecciones permanentes en función de su superposición a la pirámide social de los poderes y para defender el monopolio de sus aparatos reales. El Estado, en su forma actual de constitución, representa una verdadera carrera de obstáculos para la confrontación política. Por eso una política verdaderamente renovada no puede someterse a las disciplinas estatales.

Sin embargo, esto no significa que se deba recomendar un repliegue o una regresión de las intervenciones públicas, ni una improbable afirmación de la sociedad civil contra la sociedad política. Lo que debe imponerse al Estado y a las instituciones estatales es una política desestatizada y se debe acabar con sus prácticas burocráticas autoritarias. Políticas públicas que subordinan los organismos administrativos e insuflan un nuevo espíritu a los servicios públicos asumen efectivamente para la colectividad un significado completamente diferente al de las políticas decididas por las élites inaccesibles que debía soportar. Entonces se vuelve muy difícil oponer la «ligereza» de la iniciativa privada al servicio de la valorización, a la supuesta pesadez del sector público.

La cuestión de la propiedad también adquiere una dimensión diferente: una propiedad pública desestatizada, es decir, una verdadera propiedad social basada en la cooperación y la concertación, flexible en su reglamentación y en sus modalidades de creación, puede contrastar notablemente con la propiedad capitalista, que es acaparamiento y trae consigo la exclusión de la mayoría del derecho de disponer sobre los medios de producción y de comunicación. Desde esta óptica, las relaciones entre lo

público y lo privado pueden ser vistas con un ángulo diferente: debería ser *público* todo lo que pertenece a la producción social, debería ser *privado* todo lo que es el campo de la formación de los individuos, de la organización de su vida, los medios y modalidades de su inserción en la sociedad (incluida su propiedad personal).

Sigue en pie, evidentemente, el hecho de que los explotados y los oprimidos, a pesar de su resistencia y de sus luchas, no son espontáneamente portadores de una nueva socialización política. Como todos los miembros de la sociedad actual, sufren lo que Marx llama la subsunción real bajo el comando del capital, es decir, los efectos de sumisión inducidos por el conjunto de las formas y dispositivos de la valorización y su objetividad fetichizada. Los flujos tecnológicos que sirven para la acumulación del capital, las superposiciones e interdependencias a las que dan lugar, aparecen efectivamente como fuerzas irresistibles porque han sido colocados fuera del alcance de quienes los ponen en movimiento.

No hay en esto ninguna magia: la tecnología y los arreglos sistémicos propios de los movimientos del capital funcionan como una segunda naturaleza debido a las formas de vida en las que se insertan los individuos, y más particularmente los asalariados. Cuando los miembros de la sociedad quieren reproducirse como seres singulares, deben buscar realizarse implicándose en los mecanismos de la valorización. Deben actuar de acuerdo con la teleología del valor, es decir, conducirse racionalmente privilegiando los comportamientos valorizantes respecto a los otros. No es posible realizarse sino reprimiendo o evacuando las experiencias y las aspiraciones que perturban la autovalorización. La conducción racional de la vida termina por convertirse en obsesiva, negadora total o parcialmente de lo que le parece irracional, lo que no le impide al mismo tiempo ocupar irracionalmente (desde el punto de vista de la multilateralidad del individuo) y afectivamente los instrumentos y el campo de la valorización. Se produce como consecuencia de las relaciones que se podrían calificar de relaciones de consaguineidad y de connivencia entre el conjunto de los dispositivos y arreglos de la subsunción real y los asalariados dominados.

Sin duda, se puede observar que los sistemas en movimiento del capital se levantan frente a los agentes de la producción como potencias extranjeras. Pero no se debe olvidar que esa extrañeza no excluye, como lo hemos visto ya, la proximidad y la familiaridad. La segunda naturaleza es constringente y todos saben que es necesario obedecer a sus leyes para obtener resultados, al mismo tiempo que es un terreno para desplegar las

subjetividades, su éxito y sus fracasos: es objetivada, pero también subjetivable.

La acción colectiva no deroga esta fenomenología del valor y la subsunción real si se queda en los límites de una valorización colectiva de la fuerza de trabajo. Evidentemente, no se puede negar que la reunión (o la coalición) de individuos hasta entonces aislados hace aparecer en filigrana formas sociales nuevas (en particular la asociación solidaria). Sin embargo, esas formas embrionarias no pueden cristalizarse como formas de vida opuestas a la subsunción mientras están dominadas por los movimientos del capital. Para que las cosas marchen en forma diferente es necesario, en efecto, que la acción solidaria asuma y exprese todo lo que hay de no-conforme en lo vivido reprimido y en las experiencias de los individuos, y que lleve a rechazar la unicidad de sentido impuesta a las relaciones sociales por las formas de vida de la valorización, todo eso con el objetivo de favorecer la producción de significados plurales en las prácticas de los individuos y de los grupos. Las potencias del actuar colectivo deben en cierta medida hacer aparecer siempre más lo posible contra la objetividad fetichizada de las acciones de la subsunción.

Tales desplazamientos suponen, por consiguiente, como lo demostró muy bien Jean Robelin,¹ una ampliación de la política. Ésta no debe reducirse a opciones entre programas y equipos; por el contrario, debe facilitar nuevas inversiones subjetivas y la búsqueda de nuevas identidades individuales y colectivas. La política no debe ser el todo de la sociedad pero, para ampliar su horizonte, no tiene que detenerse en las situaciones establecidas ni tampoco fijarse como objetivo contener las contradicciones sociales. Debe ser, eminentemente, una actividad para la transformación permanente de las relaciones sociales y de la individuación, sin asignarse nunca como perspectiva la creación de una sociedad perfecta o el fin del conflicto entre los hombres.

Tal concepción, no hay que engañarse, obliga a ver de modo diferente los problemas de la representación política, no para negarle toda justificación o invalidarla en su totalidad, sino para darle otras bases y otras reglas. La representación política, tal como se desarrolló en el marco del Estado nacional con preocupaciones sociales, está en efecto sujeta a dos limitaciones fundamentales.

En primer lugar, las diferentes representaciones (o escenificaciones de los intereses de grupo) deben someterse a límites de homogeneización, de integración por lo menos puntual a lo ya instituido. Los textos, los relatos producidos en las operaciones de representación, si pueden dis-

tinguirse unos de otros y marcar diferenciaciones, no deben, sin embargo, alejarse demasiado de las normas preestablecidas destinadas a poner freno, cuando no a proscribir, la irrupción de nuevos poderes instituyentes.

A esta primera limitación se agrega una segunda, que tiene su fuente en las desigualdades en el acceso a la representación (ingresos, cultura, etc.) y sobre todo en las mismas desigualdades de representación. Los regímenes electorales, las modalidades de organización de los partidos y de las agrupaciones con vocación política, los modos de difusión de las informaciones, tienden innegablemente a privilegiar a ciertas capas de la sociedad en detrimento de las demás. El ciudadano —por excelencia aquel que mantiene una relación positiva con la política—, es ante todo un hombre (sexo masculino) que dispone de un mínimo de poder y de prestigio ya antes de expresarse políticamente; y que, con la representación, puede redoblar los efectos de poder que ejerce sobre su medio. Él es quien constituye la mayoría de los representantes y cuando no es más que un representado, tiene muchas más posibilidades de hacerse escuchar que aquellos cuya ciudadanía es restringida. Esta realidad a veces es trastornada por la irrupción de movimientos de masas, pero no es fundamentalmente transformada mientras no sean cuestionadas las estructuras elitistas de la representación. La representación política, dominada por estas limitaciones, engendra obligatoriamente en su funcionamiento, y por él, apatía, desafección. Es habitual que los politólogos deploren la débil tasa de participación política en ciertas elecciones y en las organizaciones políticas. Pero no hay que engañarse, pues los llamados voluntaristas a una mayor participación o incluso las puntas altas de participación en ciertas coyunturas, no pueden cambiar nada esencial, es decir, la mayor participación de unos y la menor de otros.

Para que exista verdaderamente mayor actividad política entre quienes participan con poca o muy poca intensidad, es necesario antes que nada modificar los canales de la expresión política, en especial las organizaciones políticas permanentes que son los partidos. Estos, en efecto, están estatizados en muy amplia medida y transmiten a su base muchas limitaciones institucionalizadas, incluso cuando son fuerzas de oposición. Además, reproducen en su seno la jerarquización del campo político de la representación, a través de la diferencia que hacen entre los dirigentes, militantes, miembros simples y simpatizantes (particularmente en los partidos llamados de masa).

Demasiado a menudo se trata de explicar esos fenómenos solamente por la corrupción material, olvidando las ventajas en poder y en prestigio

que se pueden adquirir participando en los órganos dirigentes (que también están jerarquizados) o en los órganos operativos de los partidos. Todos los que se entregan «a la causa» e invierten en ella sus energías retiran una promoción simbólica que les eleva por sobre la gente común y las masas. Son los iniciados, los que saben o participan en un saber superior con relación a los que no pueden saber. Son, por consiguiente, quienes difunden la buena nueva, es decir, la que viene desde arriba y que se puede diseminar en todas partes simplificándola o modulándola para obtener efectos.

A partir de tales premisas, la participación de la mayoría de los representados no puede superar el nivel de adhesión a orientaciones más o menos abstractamente definidas y a jefes políticos más o menos carismáticos. Parafraseando a G. Deleuze y a F. Guattari en *Mille Plateaux*, uno puede sentirse tentado a decir que la macropolítica predomina sobre la micropolítica, es decir, sobre todas esas reacciones, todos esos movimientos en la base de la sociedad que son separaciones con respecto a las relaciones institucionalizadas de representación.

Todos los aparatos que están instalados en el accionar de la macropolítica (estatal o paraestatal), en general se dan perfecta cuenta de que, por lo menos en parte, hay que dejar actuar a la micropolítica o, más precisamente, a las micropolíticas que no tienen lazos entre sí. Para que las macropolíticas sean creíbles, es necesario en efecto que parezcan dictadas por preocupaciones que llegan desde abajo. Sin embargo, esas preocupaciones no deben aparecer como movimientos supraindividuales, como desplazamientos con respecto a la política institucional que impliquen relaciones transindividuales y relaciones de grupos. El representado debe seguir siendo un individuo cuyos lazos sociales deben pasar por el reconocimiento que les conceden las macropolíticas. O, dicho de otro modo, el espacio público no debe ser poblado por singularidades que viven en lo múltiple y de multiplicidades que se abren paso a través de singularidades, sino por representados separados, incluso atomizados, en su expresión política.

Por eso es necesario dinamizar el espacio público mediante las micropolíticas si se quiere modificar profundamente las actividades políticas. Los partidos, en particular, deben dejar de tener privilegios en la representación con respecto a las iniciativas de los ciudadanos, a las coaliciones temporales que se fijan objetivos limitados. Para eso es necesario que todas las formas de asociación política puedan tener los medios para hacer conocer sus posiciones. Es necesario igualmente que se faciliten los

procedimientos refrendarios y de democracia y se ayude a los movimientos y a las acciones en pro de la transformación de las relaciones sociales.

En definitiva, la lucha contra la lenta agonía de la democracia, así como la lucha por su expansión y florecimiento, no pasan por la propagación de esquemas institucionales ideales, sino por el cuestionamiento concreto del estado de cosas existente y de los mecanismos de la reproducción social. La política democrática es una política que se niega a reverenciar el *statu quo*, aunque sepa que no todo es posible en cualquier momento. Es una política instituyente para sacudir las rutinas y encontrar soluciones a los conflictos que atraviesan los procesos sociales. Al mismo tiempo está buscando fórmulas de concertación y de asociación transnacionales para conjugar los esfuerzos más allá de las fronteras. Ella favorece la autodeterminación individual en la autodeterminación colectiva.

La democracia, en el fondo, no se reduce a procedimientos sino que es, en lo sustancial, una gramática de la libertad política, pues establece las reglas que permiten expresarse a todos y a cada uno. Es también una pragmática de la liberación porque combate a todas las formas de opresión.

Notas

¹ "La rationalité de la politique", *Annales littéraires de l'Université de Besançon*, 1995.

París, diciembre 1996

(Traducción del francés: Guillermo Almeyra.)

Viento del Sur
Revista de ideas, historia y política